



Girón 50

Canje no, indemnización (XXVII)

GABRIEL MOLINA

LOS DIEZ prisioneros que integraron la comisión para discutir en Washington la propuesta de pago de una indemnización por la invasión de abril, regresaron a Cuba el 27 de mayo de 1961. Fueron conducidos al hospital naval, donde todos se hallaban internados. Se les permitió traer bultos enviados por sus familiares. Pero las negociaciones no eran cómodas.

Habían regresado los diez prisioneros: Waldo Castroverde Giol, paracaidista de la brigada 2506; Ulises Carbó, ex subdirector del diario Prensa Libre; Gustavo García Montes, abogado, cargador de morteros en la invasión, sobrino del ex primer ministro de Batista, Yoyo García Montes; Ceferino Álvarez Castrillón, artillero; Mirto Collazo Valdés, exmilitar de la tiranía; Luis Enrique Morse, capitán del barco Houston hundido durante la agresión; Hugo Sueiros Ríos, exmilitar de la tiranía y jefe de batallón; Juan José Peruyero, jefe de compañía; Félix Eloy Pérez Tamayo, exsargento de la tiranía, y Reinaldo Pico. Ellos habían sido elegidos como representantes de cada compañía de la brigada de invasores, para discutir en Estados Unidos la propuesta.

Las primeras nubes sobre el destino de los prisioneros provocaron una respuesta de Fidel que rechazaba las declaraciones del Departamento de Estado. El Primer Ministro de Cuba dijo que si el gobierno de Estados Unidos se empeñaba en seguir considerando como canje lo que era en realidad una indemnización, la cancelaría.

La comisión informó que se había creado un comité allí para la negociación, integrado por la señora Eleanor Roosevelt, viuda del presidente de Estados Unidos; Milton Eisenhower, hermano del expresidente, y Walter Reuther, dirigente obrero norteamericano, quienes aceptaban las negociaciones.

Fidel declaró que Cuba negociaría con ese comité presidido por “la viuda del presidente Franklyn D. Roosevelt. La Casa Blanca, por su parte, dio a conocer que el presidente Kennedy participó en la creación del comité privado para adquirir 500 tractores y solicitó al público que contribuyera.

La declaración del gobierno de Estados Unidos añadía que la administración ni oponía obstáculos ni ayudaba al esfuerzo de ese grupo “totalmente privado”.



Momento en que la Comisión presidida por Eleanor Roosevelt e integrada por Walter Reuther y el Dr. Milton Eisenhower (en la foto) recibe a los miembros de la Brigada 2506 enviados a Washington a negociar.

Anunciaba que probablemente el propio Presidente contribuiría como individuo privado a la formación de ese fondo.

El asunto había desatado una polémica en Estados Unidos. Algunos senadores criticaron a Kennedy por tomarse tanto interés en el asunto. Sin embargo, el expresidente Harry S. Truman, proclamó la necesidad de que el gobierno asumiera oficialmente la responsabilidad por el envío de los 500 tractores “si es que quiere hacerla con éxito”.

Pero políticos del Partido Republicano como el excontendiente de Kennedy, Richard M. Nixon, y el senador Barry Goldwater, censuraron acremente a Kennedy. Años después, asistentes de este han dado versiones más amplias del asunto. Uno de sus consejeros, Arthur M. Schlesinger, escribió que el Comité Roosevelt fue formado por el propio Kennedy, quien habló personalmente con los integrantes para solicitarles aceptasen. Añadió que Kennedy trató de formarlo con dos demócratas (la señora Roosevelt y Reuther) y dos republicanos, para evitar las críticas partidistas, pero George Rommey, presidente a la sazón de la American Motors, se negó a participar.

No obstante, con un intercambio de mensajes quedaba prácticamente oficializada la negociación entre el Gobierno

Revolucionario de Cuba y las autoridades de EE.UU., a través del Comité de Ciudadanos.

En el primer mensaje el Comité pidió una ratificación del ofrecimiento hecho por Fidel de liberar a los prisioneros si era pagada la indemnización. En su respuesta, Fidel criticó a quienes se oponían en Estados Unidos a la indemnización a pesar de que nadie regateó los 45 millones de dólares que costó la invasión de Girón al tesoro norteamericano.

Fidel manifestó que para realizar la negociación sería conveniente el viaje a Cuba de una comisión del Comité, lo que fue aceptado. Puntualizó que debería estar investida de facultades para discutir y decidir sobre el monto y calidad de la indemnización que Cuba reclamaba.

El sociólogo C. Wright Mills elogió la generosidad de Fidel Castro y dijo que al hacer ese ofrecimiento, demostraba nuevamente su estatura internacional. El autor del libro **Escucha yanqui**, una crítica a la actitud de Estados Unidos con Cuba, reiteró que si físicamente le fuera posible, se hallaría luchando al lado de Fidel Castro.

Mientras tanto, en Washington el senador por Oregón, Wayne Morse, anunció su decisión de ordenar una investigación del Congreso sobre el secuestro de algunos de los invasores, encerrados en la isla

puertorriqueña de Vieques; algunos rescatados de las aguas caribeñas después del fracaso y otros que permanecieron en los campamentos de Retalhuleu y Florida.

Según la agencia AP se presumía que Estados Unidos no deseaba que nadie conversase con los sobrevivientes hasta que disminuyera el furor sobre la debacle.

En efecto, tanto entre los sobrevivientes como entre los parientes residentes en Miami, existía toda clase de opiniones en esos momentos, que respondían a toda clase de intereses. No todos se hallaban sanos y salvos en el hospital habilitado en La Habana del Este. Muchos perecieron en las costas cubanas y otros yacían en el fondo del Mar Caribe. Otros eran prisioneros también, pero de Estados Unidos, como Rodolfo Nodal Tarafa, uno de los 17 que se negaron a aceptar la jefatura de Artime y San Román impuesta por la CIA y fueron encarcelados en la selva de Peten, en Guatemala. Si se daba crédito al relato que formularon de las experiencias vividas, habían sido tratados a punta de látigo por los oficiales de la CIA.

No causó demasiada sorpresa el insólito incidente ocurrido ante el regreso a Miami de la comisión para el pago de la indemnización: en el aeropuerto, grupos de personas de origen cubano, gritaban ¡comunistas! a la comitiva presidida por la viuda del expresidente Roosevelt que cumplía el encargo del gobierno estadounidense. Otra parte de la concurrencia los protegía.

La prensa de Estados Unidos parecía entender que Fidel había puesto a Estados Unidos en una posición embarazosa, tanto aceptando la indemnización como oponiéndose a ella.

El general Lauris Norstad, jefe supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa, “hablaba por muchos cuando dijo a un amigo que la Bahía de Cochinos fue la peor derrota que Estados Unidos había sufrido desde la guerra 1812”. (1)

James Reston escribió en el New York Times: “Por primera vez en su vida, John F. Kennedy ha recibido una paliza pública. El ha afrontado enfermedades e incluso decesos en sus 43 años, pero la derrota es algo nuevo para él y lo de Cuba es peor, fue una torpeza y una humillación”. (2)

(1) Jim Rasenberger. **The Brilliant Disaster**. Scribner. New York. 2011, p 314.

(2) Ibid.

Grupos de derechos civiles impugnan Ley antinmigrantes de Georgia

ATLANTA, 3 de junio.—Varias organizaciones civiles presentaron hoy una demanda contra la Ley estatal HB 87, para detener el alcance de la dura medida antinmigrante en el estado norteamericano de Georgia, antes de que entre en vigor el 1ro. de julio, reportó EFE.

“La Ley es fundamentalmente antiestadounidense. No somos un país de ‘muéstrame tus papeles’, ni uno que cree en convertir a ciertas personas en ‘intocables’ a las que otras deben tener miedo a ayudar, albergar o transportar”, dijo a medios locales Omar Jadwat, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Georgia.

La demanda fue presentada por una coalición que incluye a la ACLU, al Centro Legal para la Pobreza del Sur y al

Centro Nacional de Ley de Inmigración, entre otras organizaciones, que señalan que la ley es inconstitucional porque “interfiere ilegalmente con el poder y autoridad federal en asuntos de migración”.

La legislación autoriza a la policía estatal a exigir la documentación de residencia y detener a las personas que sospechen estén en el país sin permiso. Igualmente se les exige a los residentes estatales, incluso los ciudadanos estadounidenses, que porten documentación todo el tiempo, precisa Democracy now.

La Embajada de México en Estados Unidos reiteró este viernes en un comunicado su preocupación sobre la HB 87 al “criminalizar la migración y abrir espacios para la aplicación selectiva de la Ley”.



Los demandantes consideran que la legislación perpetúa la retórica del odio. FOTO: AP